



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**  
**RADICACIÓN:** 05001 31 05 001 2019 00385 01  
**DEMANDANTE:** HÉCTOR FABIÁN MONTOYA AGUIRRE  
**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  
COLPENSIONES, COLFONDOS SA PENSIONES Y  
CESANTÍAS y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO  
PÚBLICO.

Medellín, catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y Colfondos SA frente a la sentencia emitida el 11 de mayo de 2022, por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Medellín.

**I. ANTECEDENTES**

Pretende el demandante se declare la ineficacia de su traslado al RAIS; consecuentemente, se condene a Colpensiones a aceptar su afiliación, a reconocer y pagar la pensión de invalidez a partir de la fecha de estructuración, es decir, desde el 06 de agosto de 2015, y hasta el mes de septiembre de 2018, teniendo en cuenta para ello el IBL de los últimos 10 años cotizados. De manera subsidiaria, pretende se condene a Colfondos SA al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia desde el 06 de agosto de 2015, y a pagar el mayor valor de la reliquidación entre la pensión reconocida en la modalidad de retiro programado y la renta vitalicia.

Como fundamento relevante de sus pretensiones, manifiesta que se afilió inicialmente al ISS hoy Colpensiones en el año 1978, trasladándose a la AFP Colfondos el 9 de mayo de 1994, sin recibir una debida, completa y

eficaz asesoría al momento de su traslado; que tenía un total de 763.28 semanas al 1º de abril de 1994, reuniendo los requisitos esenciales contenidos en la SU 062 de 2010, para su retorno a Colpensiones; que estando afiliado a Colfondos fue calificado en primera instancia por Seguros Bolívar, mediante dictamen del 24 de enero de 2017, el cual le reconoció una PCL del 59.14% con fecha de estructuración del 06 de agosto de 2015, y en segunda instancia, la JRCI mediante dictamen del 21 de abril de 2017, le determinó una PCL del 69.45% confirmando en lo demás.

Afirma que solicitó su retorno a Colpensiones en aplicación de la SU062-2010 y SU130-2013; que aceptado su traslado en el año 2017, reclamó el 23 de noviembre de 2017 la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante Res. 273663 del 29 de noviembre de 2017 por falta de competencia, ordenando la remisión del expediente a Colfondos SA, entidad que mediante comunicación del 21 de septiembre de 2018 le reconoce la pensión de invalidez en la modalidad de retiro programado; que le informó a Colfondos SA mediante comunicación del 02 de octubre de 2018, su intención de cambiar de modalidad pensional a renta vitalicia, pero dicha administradora mediante respuesta del 14 de diciembre de 2018 le comunicó que continuaría en retiro programado, dado que ninguna aseguradora aceptó la contratación (arch 01).

## II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue admitida el 9 de septiembre de 2019, ordenando su notificación y traslado a las demandadas (archivo 05), quienes dieron respuesta en término oportuno.

**Colpensiones** se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra. Arguyó que es cierta la afiliación del actor en el año 1978, y que se declaró incompetente para el reconocimiento de la pensión de invalidez, dado que el actor estaba afiliado para la fecha de estructuración a Colfondos SA. Propuso las excepciones de validez y eficacia de la afiliación al RAIS, inexistencia de nulidad de traslado de fondo pensional, inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez por falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de intereses de mora, improcedencia de la indexación, devolución de las cuotas de administración, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación (arch. 07).

**Colfondos SA**, se opuso a todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra. Manifestó que el actor se afilió de manera libre y voluntaria al fondo el 09 de mayo de 1994 efectivo a partir del 1º de junio de la misma anualidad, sin que se presente causal de ineficacia o nulidad frente al acto jurídico de su traslado, y que en la actualidad se encuentra pensionado por invalidez en la modalidad de retiro programado, pues fue esa la modalidad escogida inicialmente y solo el 2 de octubre de 2018 solicitó la modalidad de renta vitalicia, razón por la cual se cotizó con diferentes aseguradoras, sin que se obtuviera una respuesta positiva por parte de las mismas, razón por la cual el actor continuó en la modalidad de retiro programado. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, situación pensional consolidada, buena fe, ausencia de vicios en el consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias Colfondos SA, prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago (arch. 11).

Presentó demanda de reconvención, para que de prosperar la ineficacia de la afiliación, se ordene al actor reintegrar las sumas de dinero que le han sido canceladas a título de pensión de invalidez (arch. 12).

El **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**, se opuso a todas y cada una de las pretensiones, indicando que no le constan los hechos de la demanda. Adujo que el 27 de junio de 2018 la AFP Colfondos solicitó la emisión y redención anticipada del bono pensional en su calidad de representante del señor Héctor Fabián Montoya Aguirre, petición que fue atendida favorablemente a través de la resolución no. 18265 de fecha 19 de julio de 2018, sin que actualmente exista algún trámite pendiente (pdf 02 arch. 20, C01).

La **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, guardó silencio, pese a haber sido debidamente notificada (arch. 06, carp. 01, C01)

### III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 11 de mayo de 2022, declaró probada las excepciones de situación pensional consolidada y ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones

administrado por Colfondos. Absolvió a Colpensiones y a Colfondos S.A de las pretensiones de ineficacia de la afiliación. Declaró que al demandante le asiste derecho a cambiarse de modalidad pensional dentro del fondo al que se encuentra afiliado. Condenó a Colfondos S.A a continuar pagando la pensión de invalidez en la modalidad de retiro programado hasta que se contrate la aseguradora, asumiendo la suma que haga falta para su contratación. Declaró que le asiste derecho al demandante a la reliquidación de su pensión de invalidez a partir del mes de enero de 2019 y condenó a Colfondos S.A a pagar al demandante la suma de \$3.764.930 por concepto de reajuste, y a seguir reconociendo a partir del 1º de mayo de 2022 la suma de \$1.291.758 por concepto de mesada pensional, sin perjuicio del incremento anual, quedando autorizada la entidad a realizar los descuentos en salud; y condenó en costas a Colfondos a favor del demandante.

Para resolver, la juez de primer grado señaló Colfondos no cumplió con la carga probatoria, y no demostró la información suministrada al demandante al momento de su traslado, pero que se encontraba en una situación pensional consolidada al presentar la calidad de pensionado, lo cual impide su regreso al RPMPD y al no prosperar dicha pretensión, igual suerte sigue la demanda de reconvención; que es claro que el demandante solicitó el cambio de modalidad pensional, circunstancia que debe ser reconocida y aceptada por Colfondos SA, quien debe realizar los trámites pertinentes ante la aseguradora, y que mientras ello ocurre será esta AFP quien deberá continuar reconociendo la mesada pensional bajo la modalidad de retiro programado hasta que se contrate la renta vitalicia, y en todo caso, deberá asumir la suma necesaria que haga falta para la renta vitalicia en caso que el saldo de la cuenta de ahorro individual no alcance para financiar la pensión al demandante; que una vez realizadas las operaciones matemáticas, el despacho encontró un IBL de los últimos 10 años de \$1.498.457, superior al reconocido por el fondo, y al aplicarle una tasa de reemplazo del 75% se obtiene una mesada pensional de \$1.123.843 para el año 2018.

#### **IV. RECURSO DE APELACIÓN**

**La parte demandante** interpuso recurso argumentando que no desconoce la línea jurisprudencial frente a la ineficacia de pensionados, pero que en el presente caso, se presentó una circunstancia particular pues el

demandante solicitó la pensión de invalidez ante Colpensiones y como consecuencia de esa negativa se dio el reconocimiento y pago a cargo de Colfondos S.A, por lo cual dicho traslado no se dio de manera voluntaria y libre pues era la única opción de acceder a la prestación económica; que la reliquidación realizada por el despacho se reconoció desde el año 2018, cuando su causación y disfrute lo es desde el año 2015, fecha de estructuración de la invalidez; prestación que debe ser reconocida bajo la modalidad de renta vitalicia, pues, aunque se desconoce el valor de la misma, siempre será superior a la reconocida en retiro programado.

**Colfondos S.A** por su parte solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, señaló que aunque obra prueba de la solicitud de cambio de modalidad pensional del demandante a renta vitalicia, dicho reconocimiento se da a través de la contratación con la aseguradora no por parte de la AFP y por tanto, esta última no puede asumir el pago de una pensión bajo dicha modalidad teniendo en cuenta que no existe oferta por una aseguradora que administre dicha prestación; que en caso de confirmarse la decisión de instancia, se condicione el pago de la pensión en la modalidad de renta vitalicia a la existencia de una oferta de una aseguradora, pues sin esta, no se puede cambiar la modalidad pensional y por ende tampoco ordenar la reliquidación pretendida; que no es procedente la reliquidación de la mesada pensional al actor, pues el pensionado lo está bajo la modalidad de retiro programado y menos ordenar un incremento con base en el IPC pues esto va en detrimento del saldo de la cuenta de ahorro individual.

## **V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA**

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 1º de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación, y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar (arch. 02).

**Colpensiones** presentó alegaciones manifestando que el demandante se encuentra pensionado a cargo de Colfondos SA, situación que a todas luces hace inviable que aquel pueda ser vinculado en calidad de afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida dada la calidad de Pensionado que ostenta; y que, no se trata solo de revertir el acto de

traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida (arch. 03 Carp 02).

**La parte demandante** por su parte aduce que es beneficiario del régimen de transición por lo que su retorno al RPMPD se puede realizar en cualquier momento; que es Colpensiones el responsable del pago de la pensión de invalidez, máxime cuando la afiliación a dicha entidad se encontraba vigente; y que, ante la negativa de Colfondos SA en el reconocimiento pensional bajo la modalidad de retiro programado y dada su situación económica, aceptó la modalidad de renta vitalicia, sin embargo, esta selección no fue libre ni voluntaria (arch. 04 Carp 02).

**Colfondos S.A** afirma que el demandante efectuó el acto de traslado del RPMPD al RAIS de manera libre y voluntaria el 9 de mayo de 1994, efectivo a partir del día 01 de junio de 1994, sin ningún tipo de presión; que es cierto que el actor solicitó el 02 de octubre de 2018 el cambio de modalidad pensional, pero que ante la gestión desplegada por la AFP ninguna aseguradora aceptó suscribir el contrato de renta vitalicia, por lo cual no es responsabilidad de Colfondos SA dicha negativa pues no puede obligar a terceros a suscribir una renta vitalicia; y que, la prestación económica bajo la modalidad de retiro programado, se financió gracias a la suma adicional pagada por parte del patrimonio autónomo, pues los dineros que reposaban en la CAI eran insuficientes (arch. 05 Carp 02).

## **VI. ACLARACIÓN PREVIA**

Resulta necesario aclarar que, la suscrita Magistrada Ponente no comparte las consideraciones reiteradas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en aquellos asuntos referentes a la nulidad o ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, razón por la cual, había adoptado decisiones apartándose razonadamente del criterio de la alta Corporación, en particular del vertido en providencias cuyas consideraciones no contaban con mayoría, analizando lo dispuesto en la normatividad vigente en la fecha de suscripción del acto jurídico de traslado, respecto a la validez de los actos jurídicos en general y del traslado de régimen en particular, así como las cargas probatorias, y los matices relevantes de las decisiones adoptadas hasta el año 2019, todo ello en virtud de la autonomía

e independencia judicial, así como las circunstancias fácticas de cada caso, las afirmaciones y condiciones particulares de las partes, y las pruebas allegadas y practicadas en cada proceso, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 60 y 61 del CPTSS.

Empero, con ocasión de las decisiones emitidas por la Sala de Casación Laboral, entre otras, en la providencia CSJ STL3201-2020, en las que no solo se dejaron sin efecto las sentencias proferidas en segunda instancia, sino que se exhortó a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC a acatar el precedente, y a cumplir de manera rigurosa el deber de transparencia y carga argumentativa suficiente al apartarse del precedente judicial emanado de esa Corporación en los asuntos de ineficacia de traslado de régimen, pese a que en todos ellos efectivamente se había cumplido con esa carga, bajo el mandato contenido en el referido exhorto, que fue varias veces reiterado, se acata el criterio del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral.

## **VII. CONSIDERACIONES**

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la AFP Colfondos SA, conforme a lo dispuesto en los arts. 66 y 66A del CPTSS. Así, el problema jurídico en este asunto consiste en determinar si el traslado del demandante del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad, surtió plenos efectos jurídicos, o si por el contrario, fue ineficaz por falta de información suficiente por parte de las administradoras del RAIS, que le permitiera contar con un consentimiento informado en la celebración del acto jurídico, y si hay lugar a declarar tal ineficacia pese a que cuenta con el estatus de pensionado.

En defecto de lo anterior, habrá de verificarse si procede la reliquidación de la pensión de invalidez, a cargo de Colfondos S.A, desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, o desde el año 2018 como fue reconocido por la *a quo*; y finalmente, determinar si la AFP ésta obligada a reconocer la pensión de invalidez en la modalidad de renta vitalicia o si la orden impetrada por la juez de instancia se ajusta a los lineamientos legales y jurisprudenciales.

Se encuentra acreditado dentro del plenario que: i) el demandante nació el 27 de septiembre de 1961 (pág. 7 arch. 02 C01); ii) se afilió al extinto ISS donde efectuó cotizaciones entre el 15 de marzo de 1978 y el 31 de mayo de 1994 para un total de 771.86 semanas (págs. 48 arch. 2 C01); iii) el 09 de mayo de 1994 se trasladó al RAIS administrado por Colfondos con fecha de efectividad desde el 1º de junio de esa anualidad (pág. 28 arch. 11 C01); iv) fue calificado por Seguros Bolívar mediante dictamen del 24 de enero de 2017 estableciendo una PCL del 59.14% con fecha de estructuración del 6 de agosto de 2015, porcentaje que fue modificado por la JRCI mediante dictamen del 21 de abril de 2017 determinando una PCL del 69.45%, confirmando en lo demás (págs. 15 a 24 y 35 a 38 arch. 2 C01); v) el 16 de julio de 2017 solicitó a Colpensiones su afiliación de conformidad con la SU 062-2010, la cual fue aceptada por dicha administradora mediante certificado el 04 de octubre de 2017 (págs. 42 a 46 arch. 2 C01); vi) solicitó la pensión de invalidez a Colpensiones el 23 de noviembre de 2017, la cual fue negada mediante Res. 273663 del 29 de noviembre de la misma anualidad, declarándose dicha administradora incompetente para resolver de fondo (págs. 50 y 54 a 59 arch. 2 C01); vii) a través de comunicado del 21 de septiembre de 2018, Colfondos le reconoció la pensión de invalidez al actor desde la fecha de estructuración de su invalidez el 6 de agosto de 2015, cuyo retroactivo sería pagado en octubre de 2018 (págs. 182 a 185 arch. 2 C01); y, viii) el 2 de octubre de 2018, el actor solicitó el reconocimiento en la modalidad de renta vitalicia (págs. 186 a 188 arch. 2 C01).

**De la ineficacia de traslado.** El traslado de régimen por vinculación a una AFP, es un acto jurídico que requiere para su eficacia y validez, del consentimiento exento de vicios, objeto y causa lícita, así como el cabal cumplimiento de la forma solemne en los actos o contratos que así lo exijan.

El art. 13 de la Ley 100 de 1993, en su lit. b) estableció que la selección de uno cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones, será libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado.



Dispuso el art. 271 de la Ley 100, que, si cualquier persona natural o jurídica impide o atenta en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El inc. 1º del art. 114 de la Ley 100 de 1993, impuso como exigencia a los trabajadores y servidores públicos, que por primera vez se trasladaran del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad, que deberían entregar una comunicación escrita, donde constara que la selección había sido libre, espontánea y sin presiones, y el inc. 7.º del art. 11 del Decreto 692 de 1994, permitió que la citada manifestación estuviera ‘preimpresa’ en el formulario de vinculación, norma que se encuentra en plena vigencia y no ha sido materia de derogatoria alguna.

Antaño, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que las Administradoras de fondos de pensiones ostentan una responsabilidad de carácter profesional, de ahí que tienen el deber de brindar a sus afiliados una asesoría que les permita tener los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión tomada al momento del traslado, y por ende, la carga de la prueba de acreditar el cumplimiento de ese deber de información corresponde al fondo de pensiones, sin importar si la persona era o no beneficiaria del régimen de transición, o tenía una expectativa pensional, ya que esto resulta inane para la aplicación del precedente precitado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989; reiterada en la CSJ SL, 6 dic. 2011, rad. 31314, CSJ SL1688-2019).

También, la jurisprudencia ha establecido que el formulario no es prueba del consentimiento informado, oportuno, suficiente y veraz, por ende, no prueba la información otorgada, pero sí acredita, a lo sumo, el consentimiento del afiliado sin vicios, sin que sea necesario acreditarlos para predicar la falta de información por parte de los fondos de pensiones (CSJ SL19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL5292-2021, CSJ SL1501-2022, CSJ SL1637-2022 entre otras).

En el caso que hoy ocupa la atención de esta Sala, el 09 de mayo de 1994 el demandante se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Colfondos SA, conforme certificado aportado por dicha administradora (pág. 28 arch. 11 C01) y formulario de afiliación (pág. 11 arch. 02 C01); esta última, en la cual, si bien se refiere que la decisión se adoptó libre y voluntariamente, esa sola afirmación no acredita que en efecto se le haya suministrado la información oportuna y veraz, en los términos dispuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; de manera que, faltar al deber de información que tienen las administradoras de los fondos privados para efectuar los traslado, conlleva en principio, a declarar la ineficacia del acto.

Sin embargo, en este preciso caso, no podría declararse la ineficacia de la afiliación, porque no es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haberse efectuado el traslado de régimen, por cuanto aceptó el reconocimiento de la pensión de invalidez que le hizo la AFP Colfondos SA a través de documento expedido el 21 de septiembre de 2018 (págs. 182 a 185 arch. 2 C01) solicitada desde el 15 de junio de 2018, reconocida y pagada a partir del mes de octubre del mismo año, aceptando expresamente su pago, como lo admitió en el interrogatorio de parte que rindió en primera instancia (págs. 36 a 38 arch. 11 C01), sin que el monto de la mesada pensional se constituya, por sí sola, en una causal de nulidad o ineficacia.

Igualmente, no puede desconocerse la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la coexistencia de los regímenes pensionales, las técnicas excluyentes para la financiación del sistema pensional y la diferencia en el concepto de solidaridad de cada uno de los regímenes, que entre otras, en la sentencia CC C-083-2019, expresó:

“el Estado optó por dos técnicas excluyentes la de reparto y la de capitalización. En la primera, la prestación se financia a partir de una cuenta global, compuesta por todas las cotizaciones que ingresan en un determinado periodo y que se distribuye entre sus beneficiarios, cubriendo así las cargas del sistema. La Ley 100 la acoge a través del régimen de prima media con prestación definida, y subraya su carácter interdependiente y por tanto solidario, pues los recursos actuales cubren las obligaciones ya causadas y esto, en sí mismo, genera una tensión permanente en su financiamiento que ha conducido a que el Estado disponga parte de su presupuesto para subvencionarlas.

De otro lado la técnica de capitalización, en términos simples, se realiza a través del ahorro individual, de manera que las cotizaciones de los afiliados son las que alimentan su reserva que se incrementa con los intereses que recibe, por todo el tiempo cada asegurado y se hace efectivo cuando se completa un valor suficiente para asegurar el pago de la pensión. En la Ley 100 de 1993 esto tiene una variación, pues por razón del principio de solidaridad y de la finalidad de progresión en la cobertura, aun si el valor del ahorro no alcanza, pero se convierte en cotizaciones de semanas, se garantiza una pensión mínima.

Estas reflexiones sobre cómo funcionan las técnicas para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones son útiles, entre otros permite advertir que la técnica de reparto -régimen de prima media- tiene un alto componente de solidaridad intra e intergeneracional [30], y que dadas sus características el Estado subsidia una parte de dicha prestación [31], de manera que no puede argüirse que la pensión deba reflejar estrictamente aquello que se cotizó”.

Adicional a ello, en la providencia CC C-1024-2004, al analizar la exequibilidad del art. 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el art. 13 de la Ley 100 de 1993, la citada Corporación manifestó:

“el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones,...” y “el objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes.

Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional...”.

De tal manera, al ser los regímenes de prima media y de ahorro individual excluyentes entre sí por su forma de financiación diferente, el principio de solidaridad es disímil entre ellos, para quienes en el régimen de prima media han aportado al sistema con un alto componente de solidaridad intra e intergeneracional, lo que no ocurre con los aportantes al régimen de ahorro individual que decidieron ahorrar en una cuenta individual y el aporte solidario es para ellos mismos en caso de no contar con un capital suficiente para financiar su propia pensión.

Así las cosas, una decisión contraria a la emitida por la juez de primera instancia vulneraría el principio de solidaridad propio del régimen de Prima Media, así como el de equidad y de sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones contemplados en el art. 48 de la Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 1º de 2005, en la medida en que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir o retrotraer.

Es que no se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto; de modo que no se trata solo de revertir el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida, entre muchas otras situaciones ya consolidadas, que inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los actores del Sistema y, en especial, tendrían un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones (CSJ SL373-2021, CSJ SL1577-2022, CSJ SL2160-2022); en este caso, el demandante se pensionó por invalidez, y la prestación que hoy goza es financiada con los recursos de su cuenta de ahorro individual, el bono pensional y el capital adicional, de manera que, no es factible retrotraer tales situaciones como se pretende.

Ahora, existe un argumento de peso adicional para concluir la imposibilidad de aceptar el traslado del demandante del RAIS al RPMPD y es que, la entidad que debe reconocer y pagar la pensión de invalidez al actor, es la entidad a la cual se encontraba afiliado al momento de la estructuración de la invalidez, tal como se reiteró en las sentencias CSJ SL4363-2019 y CSJ SL366-2019 *“De conformidad con lo anteriormente expuesto, es dable concluir que, por regla general, la entidad responsable del reconocimiento y pago de una pensión de invalidez es aquella en la que se encuentre afiliada la persona en el momento de la estructuración del estado de invalidez”*.

Criterio que comparte la Corte Constitucional, en la sentencia SU313-2020, en un asunto en el que se debatía si la pensión del accionante debía ser reconocida por el último fondo al que se encontraba afiliado o por aquel en el que se estructuró el siniestro, concluyendo que la Administradora encargada del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez es aquella donde se encuentre el afiliado al momento en que se estructuró su pérdida de capacidad laboral.

Por todo lo anterior, no es procedente la declaración de ineficacia de la afiliación al RAIS y su retorno al RPMPD como lo pretendía el actor, pues no

solo presenta la calidad de pensionado con afiliación activa a Colfondos SA, sino que es esta última entidad a la cual se encontraba afiliado, al momento de la estructuración de su estado de invalidez. En consecuencia, se **confirmará** en este aspecto la sentencia de primera instancia.

**Cambio de modalidad pensional. Retroactivo de la reliquidación de la pensión de invalidez.** Dispone el art. 79 de la Ley 100 de 1993, que las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, podrían adoptar la modalidad de renta vitalicia inmediata, retiro programado, retiro programado con renta vitalicia diferida o las demás que autorizara la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera), **a elección del afiliado**. En torno a la modalidad de renta vitalicia inmediata y retiro programado, que interesan en este asunto, prevén los art. 80 y 81 ídem que:

**ARTÍCULO 80. RENTA VITALICIA INMEDIATA.** La renta vitalicia inmediata, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento.

**La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva aseguradora.**

**ARTÍCULO 81. RETIRO PROGRAMADO.** El retiro programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios **obtienen su pensión de la sociedad administradora**, con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera lugar.

Para estos efectos, se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad.

El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión por retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente.

Lo dispuesto en el inciso anterior, no será aplicable cuando el capital ahorrado más el bono pensional si hubiere lugar a él, conduzcan a una pensión inferior a la mínima, y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima.

Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro programado, acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere causahabientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima.

Se observa del material probatorio obrante al interior del proceso que el demandante solicitó a Colfondos S.A el reconocimiento de la pensión de invalidez en la modalidad de retiro programado el 15 de junio de 2018 (págs.

36 a 38 arch.11 C01), prestación que le fue reconocida por dicha AFP mediante comunicación del 21 de septiembre de 2018, a partir del 06 de agosto de 2015, con pago de la primera mesada a partir de octubre, en cuantía de \$1.218.204 y un retroactivo a pagar por valor de \$46.799.972, indicándole expresamente (págs. 182 a 185 arch. 2 C01):

Por otra parte, es importante tener en cuenta la siguiente información

- La pensión le será reconocida desde el momento en que se cumplieron los requisitos que establece la ley para obtenerla.
- Del monto retroactivo que le corresponde, Colfondos le descontará el 12% como aporte al Sistema de Seguridad Social en salud.

Asimismo le informamos, que usted cuenta con la posibilidad de elegir cualquiera de las siguientes modalidades de pensión para el pago de su mesada pensional:

- a) Renta Vitalicia
- b) Retiro Programado
- c) Retiro Programado con Renta Vitalicia Diferida.
- d) Renta Temporal Cierta con Renta Vitalicia de Diferimiento Cierta.
- e) Renta Temporal Variable con Renta Vitalicia Diferida.
- f) Renta Temporal Variable con Renta Vitalicia Inmediata.
- g) Retiro Programado sin negociación de Bono Pensional.

Lo(a) invitamos a consultar en qué consiste cada una de estas modalidades en el formato anexo a esta comunicación. En caso de tener dudas o inquietudes sobre alguna de ellas, nuestros representantes de servicio estarán atentos para asesorarlo(a), para lo cual lo(a) invitamos a contactarnos a través de nuestras líneas de Contact Center.

En caso de elegir la modalidad de Renta Vitalicia, el pago de su mesada pensional estará a cargo de la Compañía Aseguradora elegida. La siguiente documentación será necesaria para adelantar su solicitud, si ya la radicó, no será necesaria información adicional.

En ese orden, días después de la comunicación, el 2 de octubre de 2018, el actor diligenció y presentó ante Colfondos formulario denominado “*Selección de modalidad de pensión*”, en el que marcó una X en la casilla de la modalidad de renta vitalicia inmediata (pág. 188 arch. 2 C01); en comunicación del siguiente 24 de octubre, se le informó por la AFP que enviarían a las aseguradoras Mapfre, Bolívar, Sura, Colseguros, Colpatria, Positiva y Global la petición de cotización correspondiente, que le sería comunicada para proceder con la gestión y posterior traslado; y, el 14 de diciembre de ese año, Colfondos le comunicó la negativa a su solicitud, así:

De acuerdo con su solicitud, radicada el día 14 de diciembre de 2018, nos permitimos informarle lo siguiente:

Esta Administradora de Pensiones, adelantó el proceso de cotización a Renta Vitalicia ante las aseguradoras Bolívar, Global, Colseguros, Sura, Colpatria, Positiva, Mapfre; entidades que ofrecen este producto en el mercado. No obstante, lamentablemente ninguna de las aseguradoras respondió dicha solicitud de cotización.

De acuerdo a lo anterior, y como usted sabe en la modalidad de renta vitalicia, el valor de la mesada y las condiciones para la contratación de renta (capital necesario y monto de la mesada pensional), las establecen las aseguradoras; es de precisar que no están interesadas en contratar una renta vitalicia, por lo anterior continuará disfrutando del pago de sus mesadas pensionales bajo el concepto de retiro programado, del Fondo Especial administrado por Colfondos S.A.

De lo anterior, observa la Sala que la AFP Colfondos S.A desconoce principios esenciales del RAIS y garantías del actor en el sistema de seguridad social, como la libre selección, la eficiencia, integralidad y la unidad, además del derecho mismo a la seguridad social, pues le impone cargas administrativas al demandante que no tiene por qué soportar, es decir, olvida la AFP que es el afiliado la parte más débil del triángulo pensional en la modalidad de renta vitalicia (administradora – afiliado o pensionado – aseguradora), y por ende, quien debe tener mayor protección.

Ahora, una de las principales características de la modalidad de retiro programado, en la que se reconoció la pensión al actor, es la posibilidad de revocar, modificar o cambiar en cualquier tiempo, dicha modalidad, en otras palabras, pasar de retiro programado a renta vitalicia es un derecho del demandante y una obligación para la AFP, pues es ella la encargada de efectuar, claro está, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran ante las respectivas aseguradoras. Supuesto fáctico que se puede presentar en dos casos; i) cuando el afiliado o pensionado solicita la modalidad de renta vitalicia o, ii) cuando la AFP se percate de que el capital de la cuenta de ahorro individual se torna insuficiente para continuar financiando una mesada pensional.

Así las cosas, ante la oportuna solicitud del actor de cambio de modalidad a renta vitalicia, que de hecho fue inmediata al reconocimiento pensional, en el que por demás está indicar se le estaba recordando que tenía esa alternativa y podía solicitarla para efectos del pago de su prestación, es obligación de la administradora no solo iniciar el procedimiento de cotización de la modalidad con las diferentes aseguradoras, sino también controlar que el saldo de la cuenta de ahorro individual no sea inferior a la suma necesaria para adquirir dicha póliza (artículo 12 Decreto 832 de 1996) y, en aquellos casos en los cuales no se reciba ninguna oferta por parte de las compañías aseguradoras, como aquí ocurrió, se le debe indicar al afiliado no solo que el capital acreditado en su cuenta resulta insuficiente, si es del caso, sino que debe proceder a llamar a la aseguradora del seguro previsional, para que esta realice el pago del saldo o la suma que haga falta para el pago de la mesada pensional o en gracia de discusión, iniciar el estudio de acceso a la garantía de pensión mínima de conformidad con el artículo 71 de la Ley 100 de 1993.

Por todo lo anterior, considera la Sala que le asiste derecho al demandante a cambiarse de modalidad pensional, lo cual trae consecuentemente que Colfondos S.A debe continuar pagando la pensión de invalidez en la modalidad de retiro programado hasta que se contrate con la aseguradora la modalidad de renta vitalicia, o se realicen los trámites pertinentes ante la aseguradora del seguro previsional para que ajuste el valor adicional que resulte necesario para el pago de la prestación en los precisos términos establecidos en los art. 69 y 70 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto, para el reconocimiento de la garantía de conformidad con los artículos 71, y 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, razón suficiente para **confirmar** la decisión de primera instancia.

**Reliquidación pensional y Retroactivo.** Acorde con lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 100 de 1993 *“El estado de invalidez, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, el monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley”*. Para lo que interesa, el art. 40 ídem, establece el monto de la pensión en un porcentaje base del 45% del IBL que se aumenta en 1.5% por cada 50 semanas de cotización adicionales a las primeras 500, si la pérdida de capacidad laboral es inferior al 66%, o del 54% que se aumenta en un 2% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 800, si la pérdida es del 66% o más, en ambos casos hasta máximo el 75% del IBL, el que se determina según lo previsto en el art. 21 de la misma ley, esto es, con el promedio de los ingresos base de cotización de los últimos 10 años o de toda la vida si es superior y el afiliado cuenta con más de 1250 semanas de cotización, sin que la pensión pueda ser inferior al salario mínimo legal mensual.

Asimismo, la referida disposición prevé que *“La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructura tal estado”*; y, el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 preceptúa que mientras el afiliado reciba subsidio por incapacidad temporal, no hay lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez (CSJ SL619-2013, CSJ SL 5170-2021, CC SU-588-2016).

Acorde con la normatividad referida, comparte esta Sala la decisión tomada por la Juez de instancia al dar aplicación a lo dispuesto en los art.



14, 21 y 40 de la Ley 100 de 1993, para establecer el valor de la mesada pensional a la que tiene derecho el actor en el régimen de ahorro individual, puesto que a esas disposiciones es menester remitirse conforme a lo dispuesto en el art 69 de la misma ley. Y en ese orden, independientemente de la modalidad en la que se reconozca la prestación, tratándose de pensión de invalidez en el RAIS, en consideración de la Sala debe garantizarse el monto mínimo y el reajuste anual del valor de la mesada pensional, puesto que en verdad se trata de una prestación definida, y al establecerse el monto en el que debe pagarse, que contrario a lo que acontece con la pensión de vejez en el RAIS, no depende del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, sino de los salarios base de cotización, la densidad de cotizaciones y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de los que se obtiene el IBL y el monto a aplicar, y se financia con ese capital acumulado y la suma adicional necesaria, para lo que resulta más conveniente sin duda alguna la contratación de una renta vitalicia que así lo garantice, haciendo uso del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual y la suma adicional necesaria con cargo al seguro previsional, empero, en este asunto, aun cuando desde pocos días después de que se reconoció la pensión el actor lo solicitó, la AFP no acreditó haber efectuado eficazmente las gestiones necesarias para hacer efectiva la pensión en esa modalidad.

Respecto al valor de la prestación y su reajuste anual, en la sentencia CSJ SL3942-2021 citada por la *a quo*, tratándose de una pensión de sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual, para cuyo cálculo la norma remite igualmente a lo dispuesto en el régimen de prima media, como en el caso de la pensión de invalidez, lo que las convierte en prestaciones definidas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, razonó:

Sin embargo, la Sala debe aclarar que en un retiro programado el único riesgo económico que puede asumir un pensionado es precisamente la fluctuación del valor de la pensión que sobrepasa la mesada de referencia. Ello porque, según se precisó, ese valor ajustado con el IPC siempre deberá garantizarse. A partir de este referente, es posible que en cada anualidad la pensión varíe positiva o negativamente en su valor, esto es que *fluctúe* de acuerdo a las dinámicas de la economía, pero siempre teniendo como base la garantía de dicha pensión de referencia.

Bajo esta perspectiva, es jurídicamente admisible que la pensión inicial de retiro programado no pueda incrementarse con el ajuste legal del IPC, siempre que aún así el pensionado siga devengando su mesada de referencia ajustada con el IPC. Para ilustrarlo con un ejemplo, si en el 2021 la pensión de referencia del beneficiario es de \$1.000.000 y este elige la opción de retiro programado de \$1.300.000, es posible que por las fluctuaciones del mercado su pensión no se incremente con el IPC en el 2022, e incluso se reduzca en el 2023; sin embargo, si la pensión de referencia ajustada con el IPC a 2023 sigue siguiendo inferior al valor del monto pensional a ese año 2023, no habría transgresión jurídica alguna.

Como puede verse, no se trata de desconocer la dinámica fluctuante de esta modalidad de retiro programado, pues, se reitera, quien la elige corre el riesgo de que su pensión inicial disminuya o se sostenga. Lo que ocurre es que en estos casos el riesgo financiero que asume el pensionado está dado únicamente en el valor que sobrepasa la mesada de referencia ajustada con el IPC, la cual siempre debe garantizarse.

Ahora, en una hipótesis de descapitalización el fondo ya ha debido advertir el riesgo de financiar mínimamente la pensión de referencia, caso en el cual deberá adelantar el trámite para suscribir una póliza de renta vitalicia que la garantice, so pena de asumir las consecuencias económicas de la descapitalización de la cuenta y cubrir la suma que se requiera cuando el capital acumulado no alcance para adquirir una renta vitalicia, según lo previsto en el parágrafo 1.º del artículo 12 del Decreto 832 de 1996 atrás citado.

Se tiene entonces que a solicitud del demandante fue reconocida le pensión de invalidez por Colfondos SA, mediante comunicado del 21 de septiembre de 2018, teniendo como fecha de estructuración y disfrute el 6 de agosto de 2015, con un total de 13 mesadas pensionales al año (pág. 182 y 196, arch. 02 C01):

Beneficiario Principal y Sustitutos							
Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
71618456	HECTOR FABIAN MONTOYA AGUIRRE	27/09/1961	Masculino	100	N/A	Principal	Activo
43026418	ARELY DEL SOCORRO ARIAS GOMEZ	21/11/1961	Femenino	N/A	N/A	Cónyuge	Inactivo
Fecha de Adquisición del Derecho:				06 de agosto de 2015			

Información General			
Edad del afiliado	56	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	\$191.411.041
% de Pérdida de Capacidad Laboral	69.45	Valor mesada	\$1.218.204
Total semanas cotizadas	2010	Valor retroactivo sin Descuentos	\$46.799.972
Estado del Bono Pensional	Acreditado	Valor Retroactivo Neto a Pagar	\$46.799.972
Valor del Bono Pensional	\$0	Fecha de pago primera mesada	octubre

Mediante comunicación del 15 de abril de 2019, Colfondos S.A estableció el valor de la mesada pensional para el año 2019 en la suma de \$1.069.540 en los siguientes términos (págs. 200 a 201 arch. 02 C01):

Con base en estas consideraciones, le confirmamos que el valor de la mesada pensional a partir del mes de enero de 2019 fue de \$ 1.069.540.

Finalmente, es pertinente resaltar que las proyecciones no son garantía, ni certeza de que el futuro se va a desarrollar de esta manera, ni en cuanto a la evolución del patrimonio pensional, ni en cuanto a la evolución futura de mesadas. Dependemos evidentemente de la evolución de las variables financieras y de cualquier modificación regulatoria, no obstante, la mesada pensional a nombre del señor Montoya no presentara modificaciones por concepto de recálculos hasta el próximo mes de enero de 2020.

El actor solicitó la reliquidación de la mesada pensional mediante petición del 7 de mayo de 2019 (págs. 202 a 203 arch. 02 C01) la cual le fue negada por la AFP mediante comunicado del 28 de mayo de 2019 (págs. 206 a 208 arch. 02 C01) al señalar:

4. De acuerdo a su solicitud, mediante la cual requiere información referente a la liquidación de la mesada pensional a nombre del señor Montoya a razón que no está conforme con el valor pensional que fue reconocido formalmente en septiembre de 2018, al respecto le comunicamos lo siguiente:

Para calcular el equivalente o la tasa de reemplazo, indispensable para definir el valor de su mesada pensional, se debe realizar el siguiente ejercicio:

- a. **El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.**
- b. **El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.**

De lo anterior, la norma menciona que la pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del Ingreso Base de Liquidación. Así mismo precisamos, que a la fecha de cálculo de su pensión de invalidez fue reconocida con el capital que usted cotizó en Colfondos y la suma adicional aportada por la aseguradora Unidad Previsional; dinero indispensable para establecer una mesada pensional de acuerdo a las condiciones antes mencionadas.

Una vez realizado lo anterior, el cálculo del monto de la mesada pensional que le corresponde es el cliente:

**IBL\* EQUIVALENTE o TASA REEMPLAZO = VALOR MESADA / O AJUSTADO AL MINIMO**

Total semanas Cotizadas	1980
IBL	<b>\$1.382.102</b>
Porcentaje de Calificación	69.45%
Equivalente	<b>75%</b>
Total	<b>\$1.036.577</b>

De esta manera y para su tranquilidad, en el ejercicio le mostramos cómo se calculó el monto de su pensión, donde la misma arroja \$1.036.577 como valor de mesada. No obstante de acuerdo al comunicado BP-R-I-L-33535-09-18, se procedió a reajustar por el valor máximo de **\$1.218.204**.

Así mismo, en certificado de pagos obrante en pág. 48 a 49 del arch. 11 C01, se reflejan los valores pagados año a año por concepto de mesada pensional, así:

<b>2015</b>	\$ 1.036.577
<b>2016</b>	\$ 1.106.753
<b>2017</b>	\$ 1.170.391
<b>2018</b>	\$ 1.218.260
<b>2019</b>	\$ 1.069.540
<b>2020</b>	\$ 1.110.200

Conforme a lo anterior, procedió la Sala a verificar el IBL del actor, correspondiente a los últimos 10 años -tabla base 2008/100- que asciende a la suma de \$1.271.758,38 para el año 2015, al que al aplicarle un monto del 75% por 2010 semanas cotizadas, da como resultado una mesada pensional por valor de \$953.818,8, suma que resulta inferior a la que obtuvo la AFP para ese mismo año por valor de \$1.036.000, con un IBL de \$1.382.102, tal como lo adujo en la comunicación de mayo de 2019 ya referida, conforme a lo cual canceló la pensión hasta el año 2018, y que constituye la mesada pensional de referencia del actor, en el régimen de ahorro individual, para efectos de la pensión de invalidez, siendo esa la cuantía mínima que debía garantizar el fondo pensional, teniendo en cuenta para ello los reajustes legales anuales.

En este punto, resulta necesario advertir que la a quo incurrió en un error, al determinar que el IBL para el año 2018 resultaba superior al que había obtenido Colfondos, puesto que la AFP lo había calculado acertadamente a 2015, fecha de estructuración de la invalidez, en consecuencia, si bien no hay lugar a reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión de referencia del actor, pues el obtenido en los términos solicitados resultaría inferior, y es por ello que solo hay lugar a ordenar el reajuste anual de ese valor, a partir del 1º de enero de 2019, sin que pueda desconocerse además, que el actor casi a la par del reconocimiento, desde el 2 de octubre de 2018, solicitó el cambio de modalidad pensional a renta vitalicia.

Efectuados los cálculos aritméticos respectivos, teniendo en cuenta el IPC para cada año, sobre 13 mesadas pensionales al año, encuentra la sala que Colfondos SA adeuda al demandante por concepto de reajuste pensional la suma de \$4.966.364, liquidada del 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, sin que sea posible establecer las diferencias causadas a partir del 1º de enero de 2021, por cuanto no se cuenta en este trámite con la información del valor pagado por concepto de mesada pensional, sin que sea procedente inferir como lo realizó la a quo, que la mesada pensional reconocida por la AFP al actor venía siendo cancelada e incrementada con el IPC anual, en consecuencia, se ordenará a la demandada, continuar reconociendo y pagando la mesada pensional al actor reajustada, en cuantía de \$1.304.767 a partir del 1º de enero de 2021, \$1.400.283 para el año 2022 y \$1.584.000 para el año 2023, sin perjuicio de los reajustes que se sigan causando, y conforme a ello, deberá cancelar las diferencias que se causen desde esa fecha, y hasta tanto se contrate la modalidad de renta vitalicia, garantizando el valor de la mesada pensional de referencia; así:

Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2015	6,77%	\$ 1.036.577	\$ 1.036.577			
2016	5,75%	\$ 1.106.753	\$ 1.106.753			
2017	4,09%	\$ 1.170.391	\$ 1.170.391			
2018	3,18%	\$ 1.218.260	\$ 1.218.260			
2019	3,80%	\$ 1.069.540	\$ 1.257.001	\$ 187.461	13	\$ 2.436.993
2020	1,61%	\$ 1.110.200	\$ 1.304.767	\$ 194.567	13	\$ 2.529.371
2021	5,62%		\$ 1.325.774			
2022	13,12%		\$ 1.400.283			
2023			\$ 1.584.000			
TOTAL						\$ 4.966.364

Por las razones expuestas y en ese sentido, se **modificará** el numeral sexto de la sentencia apelada.

Sin costas en la instancia ante su no causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE** el numeral **SEXTO** de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2022, por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto al valor del reajuste y de la mesada pensional; para en su lugar, **CONDENAR** a la **COLFONDOS SA PENSIONES Y CESANTÍAS** a pagar a **HÉCTOR FABIAN MONTOYA AGUIRRE**, la suma de cuatro millones novecientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos **(\$4.966.364)**, por concepto de reajuste de la pensión de invalidez, causado entre el 1º de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1º de enero de 2021 la entidad deberá reconocer la suma de \$1.325.774 por concepto de mesada de referencia, que para el 2022 asciende a la suma de \$1.400.283 y para el año 2023 \$1.584.000, sin perjuicio de los reajustes que se sigan causando, y conforme a ello, deberá cancelar las diferencias entre lo efectivamente pagado y los valores determinados, causadas desde la referida fecha, y hasta tanto se contrate la modalidad de renta vitalicia, garantizando el valor de la mesada pensional de referencia, quedando autorizada a realizar los descuentos por salud, y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás la decisión apelada, acorde con lo expuesto en las motivaciones anteriores.

**TERCERO:** Sin costas en la alzada.

**CUARTO:** Esta sentencia se notificará a través de EDICTO, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
Magistrada ponente

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**  
Magistrada

(\*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EiMb5q\\_vu5lNiVawKj6BERsBOKTCOEfiinG4nko-8-esAw?e=CacxEc](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EiMb5q_vu5lNiVawKj6BERsBOKTCOEfiinG4nko-8-esAw?e=CacxEc)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6fef5e619d85b1fa5c7f7c23afbfa1c48c555457d36c583a041eccb530271d3d**

Documento generado en 16/11/2023 10:49:34 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>